

América Latina: Una encrucijada, varios caminos

CEES

El Estado en América Latina

Comencemos exactamente con la pregunta clave: ¿cómo se relacionan la sociedad y el Estado en nuestro mundo? Y la respuesta es muy preocupante. En América Latina, salvo en los casos de Costa Rica y Chile -el Chile de los últimos tiempos- las sociedades no se encuentran conformes con el Estado en el que conviven y están dispuestas a ensayar cambios drásticos. Por eso es frecuente que apoyen golpes militares o a grupos violentos de izquierda que pretenden derrocar a los gobiernos por la fuerza, redacten nuevas constituciones incesantemente, y sigan a caudillos iluminados que prometen cambiar rápidamente el panorama social y acabar con las injusticias con un manotazo sobre la mesa. ¿Cómo sorprenderse? Es totalmente lógico que nuestras sociedades vivan inconformes con el sector estatal y deseen cambiarlo. Entre los factores que más estrepitosamente han fallado en nuestras sociedades está el Estado. No ha cumplido eficientemente ninguna de las funciones básicas para las que se supone que existe, y casi todos los ciudadanos debemos sufrir por lo menos diez lacras que desacreditan nuestra vida pública y generan el más profundo desprecio en nuestros pueblos contra el espacio común en que estamos obligados a convivir. Como regla general, nuestros Estados:

No protegen nuestras vidas porque apenas proporcionan seguridad. En los ocho años que ha durado el gobierno de Hugo Chávez, ha habido en Venezuela más de cien mil asesinatos, homicidios y muertes violentas. Colombia desde hace décadas es un matadero incontrolable. México, Brasil y Argentina no son capaces de erradicar a las mafias. Las *maras* aterrorizan a casi toda Centroamérica. En muchos países, las personas que han logrado hacer fortuna, a veces muy poca fortuna, deben protegerse con barrotes, muros, carros blindados, perros, guardas de seguridad y todo tipo de alarmas y cautelas para evitar ser robadas o secuestradas. Los Estados no protegen la propiedad porque condonan la ocupación ilegal de tierras y bienes inmuebles, confiscan depósitos bancarios, malgastan o malversan alegremente los fondos de jubilación, o manejan arbitrariamente el valor de la moneda, empobreciendo criminalmente a los ahorradores, que es una de las formas más descaradas del robo.

Con frecuencia, la policía no es confiable. Tiene pocos conocimientos y escasos recursos técnicos para investigar. A veces se asocia a los maleantes para proteger a los delincuentes y dividir con ellos el botín. Las cárceles son criaderos de criminales, hoteles de lujo para los condenados provistos de cuantiosos recursos procedentes del delito, o son depósitos de detritus humanos a los que se trata despiadadamente, y en los que no existen vestigios de intentos de rehabilitación. En nuestros Estados, con pocas excepciones, tampoco funciona la justicia. El poder judicial suele estar politizado. La impunidad es la norma. Se investiga mal, y la instrucción de cargos, las pocas veces que se logra, es muy deficiente. Las sentencias se compran y venden o son utilizadas por los gobiernos para someter o extorsionar a las personas juzgadas. Los políticos utilizan el sistema judicial para perseguir a sus adversarios y sacarlos del juego. Los jueces exhiben una preparación escasa porque los estudios de Derecho se

han deteriorado notablemente y no hay buenos institutos para la formación de la judicatura. Los juicios tardan una eternidad, las posibilidades de obtener fallos justos son muy reducidas y los ciudadanos se sienten desamparados.

El poder legislativo tampoco merece crédito. Los parlamentos no son mucho mejores que el poder judicial. Los legisladores se asignan y reparten privilegios a veces escandalosos. En algunas naciones reciben mayores salarios que en la opulenta Europa. Pero ni siquiera así se conforman: hay Estados en los que los parlamentarios reciben dinero secretamente para que aprueben las leyes. Existe un exceso de legislación, con frecuencia contradictoria, y muchas veces imposible de cumplir. Cambian las reglas del juego cómo y cuándo les conviene. En casi todas las encuestas los parlamentos aparecen como la institución más desacreditada. En nuestros Estados, los funcionarios y gobernantes -al menos muchos de ellos- violan o ignoran las reglas de licitación y solicitan o aceptan comisiones para la ejecución de obras públicas, convirtiendo la corrupción en una forma habitual de enriquecerse, a veces espectacularmente, aumentando con ello los costos generales de transacción y el sostenimiento del Estado, esfuerzo extra que debe sufragar la población con sus impuestos y tributos.

La educación pública suele ser rematadamente mala de acuerdo con todas las pruebas internacionales. ¿Por qué? Porque los maestros adquieren una pésima formación en mediocres facultades de pedagogía, rara vez surgen del grupo de los mejores estudiantes, se les paga miserablemente, e imparten clases en edificios destartados, sin libros ni recursos didácticos, bajo la orientación de sindicatos extremistas que no muestran el menor interés en la calidad de la educación ni en el mejoramiento académico de los docentes.

Los servicios de salud pública son escasos, de baja calidad, muy mal dotados, y apenas existentes en las zonas rurales donde los niveles de escolaridad rara vez exceden los primeros grados. Pero tan nefasto como el panorama descrito suele ser el abusivo trato de la burocracia pública. No funciona la meritocracia. No ascienden los mejores ni separan de sus cargos a los ineficientes. El Estado no es un sitio al que se va a trabajar para beneficio de la comunidad, sino a cobrar un salario con el compromiso de apoyar al gobernante de turno. No hay espíritu de servicio, y los plazos administrativos se eternizan. La solución de los trámites a veces exige el pago de sobornos. Los expedientes se pierden y no hay a quién acudir para obtener lo que el derecho teóricamente nos concede. En nuestros Estados, el favoritismo es rampante. No hay turno que no se salte el que posee influencias. "Quien tiene padrino se bautiza", dice el refrán, y no hay sanción severa para el burócrata que viola las normas ni para el ciudadano que se beneficia de ello. Con semejantes Estados, totalmente incompatibles con la creación sostenida de riquezas, ¿puede alguien sorprenderse de que una buena parte de la ciudadanía, a veces mayoritaria, esté dispuesta a seguir a cualquier flautista de Hamelín que, como en el cuento de los Hermanos Grimm, los lleve a la catástrofe convocando a la aventura populista o revolucionaria. ¿Qué más pueden temer un ciudadano desesperado, padre de una familia casi siempre numerosa, o una madre soltera, generalmente desempleados crónicos o con trabajos precarios, que viven en unas casuchas derruidas, rodeados de niños hambrientos y con parásitos, cobijados bajo un techo de zinc, sin agua potable ni alcantarilla, acostumbrados a robarse ilegalmente la electricidad porque carecen de dinero para

pagarla? Es cierto que pueden perder la libertad, y eventualmente podrán comprobar cómo la estupidez de los nuevos gobiernos de la izquierda carnívora les cierra el camino de la superación personal, perpetuando su pobreza y convirtiéndolos en unos miserables estómagos agradecidos para siempre, pero esa triste realidad es algo que todavía no han experimentado. Por ahora todo lo que saben es que el Estado ha fallado, que sobreviven malamente en un mundo con muy pocas oportunidades, en el que las instituciones republicanas no les han servido para construir una vida decente en la que sea razonable tener esperanzas de superación para ellos o para sus familias.

La opción del socialismo del siglo XXI

Es ante a esta lamentable situación que nuestra América Latina se enfrenta a diferentes propuestas de cambio. La primera y más atrayente, la que sacude al Continente, es el llamado Socialismo del siglo XXI, un viejo canto de sirena tocado en una nueva clave populista ¿En qué consiste? En esencia, en retomar paulatinamente la fórmula del colectivismo estatista en el terreno económico y en suprimir las libertades democráticas en el campo político. Es la vuelta al Estado-empresario, pese a la horrenda tradición de corrupción, despilfarro, nepotismo e ineficiencia que dejó a su paso por la historia latinoamericana del siglo XX.

Es el control de precios y salarios dictado por funcionarios tan arrogantes como ignorantes, convencidos de que saben lo que hay que producir, cómo hay que producirlo, quién debe consumirlo y en qué condiciones. Es la pulverización paulatina de la sociedad civil y de sus estructuras espontáneamente generadas a través del tiempo, sustituyéndolas por organizaciones estabularias concebidas para encerrar a la sociedad con el objeto de controlarla eficientemente.

Es la militarización creciente de las personas incardinándolas en milicias civiles dedicadas a la vigilancia y la coerción. Es la demolición total de las estructuras institucionales republicanas, con los clásicos tres poderes que se equilibran para limitar la autoridad de los gobernantes. Es el abandono del pluripartidismo y su sustitución por un partido único que hará metástasis por el cuerpo social contaminando y corrompiendo todo lo que toque y controle. Es una variante del modelo militarista islámico que Nasser y Gadafi ensayaron en el Medio Oriente, donde el caudillo militar o civil se vincula con las masas para guiarlas a su antojo por medio de la correa de transmisión de las Fuerzas Armadas, con el apoyo propagandístico constante de los medios de comunicación previamente controlados. Es la construcción de enemigos artificiales, como Estados Unidos o Europa Occidental, para tratar de galvanizar a la sociedad detrás de esa corriente de odio disfrazada de nacionalismo. Es, en general, el rechazo visceral al Occidente próspero, impulsado e instrumentado por las técnicas de propaganda del viejo comunismo de la Guerra Fría, más los procedimientos de legitimación populista diseñados por Fidel Castro con sus batallones de médicos, maestros y deportistas, una operación de relaciones públicas y mercadeo político denominada "misiones" a la manera del catolicismo tradicional. Es la organización de turbas paramilitares que intimidan a la sociedad mediante el uso de pogromos para someterlas a la obediencia y hacer abortar cualquier brote de rebeldía. Es el modelo de "solidaridad orquestada" para suscitar respaldo internacional, desarrollado por la KGB en los tiempos en que la URSS experimentaba un fuerte espasmo imperial y necesitaba proyectar su imagen en el exterior. Es la constitución de un bloque

antioccidental, remedo de la guerra fría, que preconiza la hostilidad al primer mundo y sueña con su liquidación eventual. Es la asociación internacional con el radicalismo islámico para atacar los intereses de Occidente, calumniando, de paso, a Israel y a los judíos en una franca campaña antisemita.

Es el respaldo a las narcoguerrillas comunistas sudamericanas o a cualquier violento movimiento radical. Es un híbrido folclórico y vistoso, muy simpático para los ojos de los progres del primer mundo, con ingredientes de Juan Domingo Perón, de Getulio Vargas, de Velasco Alvarado, alusiones a Lázaro Cárdenas y a los corridos de la revolución mexicana, camisetas del Che, retratos de Sandino, y confusas referencias a ideólogos de distintos calibres como Antonio Gramsci, Norberto Ceresole, Marta Harnecker, Heinz Dieterich, Noam Chomsky, James Petras y otros elucubradores de esa cuerda delirante que continúa reivindicando el marxismo con una total indiferencia a la devastadora experiencia producida por la puesta en práctica de esas ideas erróneas durante el doloroso siglo XX. Es, en suma, la mayor cantidad de comunismo soviético que permiten las circunstancias tras la desaparición de la URSS, pero ahora con su centro operativo situado en el eje Caracas-La Habana, como explicó el canciller cubano Felipe Pérez Roque en un discurso pronunciado en Venezuela en diciembre de 2005.

Una vieja mercancía y una nueva estrategia

¿En qué se diferencia el *Socialismo del siglo XXI* del proyecto soviético sepultado por la *perestroika* y la *glasnost* a fines del siglo XX? En esencia, en el modo de tomar el poder. Mientras Marx y Lenin soñaban con vastas revueltas obreras que condujeran a una huelga general definitiva, y mientras Mao, Fidel Castro y Ernesto Guevara confiaron en insurrecciones campesinas que dieran al traste con los estados burgueses capitalistas, Hugo Chávez ha preferido los métodos nazi-fascistas: alcanzar el poder por medio de los resortes electorales, y desde el gobierno comenzar a desmontar el andamiaje del Estado de Derecho y de la economía de mercado hasta lograr, al cabo del tiempo, un modelo de sociedad colectivista y autoritaria cercana al paradigma cubano que tanto dice admirar, y hacia cuyo "mar de la felicidad" desea que Venezuela se desplace. ¿A dónde conduce ese batiburrillo de disparates, sofismas, necedades y afirmaciones contrarias a la experiencia y al sentido común? Sin duda, al fracaso, a mayores índices de pobreza y corrupción, al odio de clases, al autoritarismo, a la ausencia de libertades, al control de la libertad de expresión, a la dictadura y, finalmente, a la desilusión progresiva de una parte sustancial de las personas que originalmente lo apoyaron y se fueron desencantando en el camino. Pero también conduce, además, a la instauración de una perversa dinámica social que hace muy difícil corregir los problemas porque los errores conceptuales y las prácticas disparatadas se enquistan en el comportamiento social y cuesta trabajo erradicarlas. ¿Por qué? Porque no hay diagnóstico más seductor, aunque sea falso, que ése que afirma que los problemas que nos aquejan no son nuestra culpa, ni emanan del modo en que hacemos las cosas, sino se deben a una conjura externa dedicada a perjudicarnos, y los defensores del socialismo del siglo XXI, como sucedió con los de los siglos XIX y XX, parten de esa premisa tan equivocada como eficaz. Al mismo tiempo, el caudillismo que suele acompañar al socialismo del siglo XXI, como ocurrió con sus antecesores, no deja de ser un alivio para esa masa grande de personas apocadas que le tienen miedo a la libertad, como escribía Erich Fromm hace unas cuantas décadas. Gentes que prefieren que sean otros los que tomen por ellos las

decisiones trascendentales y les construyan desde afuera sus modos de vida, aunque sean vidas miserables, ahorrándoles la agonía de tener que escoger y luchar responsablemente por conquistar formas superiores y más confortables de existencia. La verdad dolorosa ¿Qué hacer ante este panorama? ¿Hay alguna vacuna contra esta embestida ideológica? Lo primordial es advertir que no estamos, solamente, ante un debate de ideas, enfrentando a Hayek y a Marx o a Marta Harnecker contra Carlos Rangel, sino estamos ante la difícil tarea de reconciliar a la sociedad latinoamericana con el Estado democrático liberal, basado en el mercado y en el Estado de Derecho, y eso sólo puede lograrse si se alcanzan resultados palpables en un tiempo razonable. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió en Chile o en España, donde el constante incremento de la calidad del funcionamiento del Estado y el progreso creciente experimentado por la sociedad, donde la pobreza se redujo en más de un cincuenta por ciento, ha aumentado notablemente los niveles de satisfacción con el modelo de convivencia político-económico, y ya son muy pocas las personas que plantean excentricidades disparatadas como las que se escuchan en los círculos radicales latinoamericanos.

¿Cómo tiene que funcionar un Estado para que se produzca la adhesión emocional de los ciudadanos y se disipe el riesgo del fatal desbarajuste revolucionario? Es fácil describirlo: basta con observar lo que hacemos en casi toda América Latina y movernos en la dirección opuesta: Todos, comenzando por los funcionarios electos, tienen que someterse al imperio de la ley o pagar el precio de no hacerlo. Lo que hace grande a una sociedad como la norteamericana, la canadiense, o a las más exitosas naciones europeas, es *the rule of law*. Nadie está por encima de la ley. Sin seguridad jurídica es imposible el desarrollo a largo plazo. Tiene que impartirse justicia de forma razonablemente rápida e imparcial. La legitimidad de los monarcas en la Edad Media no dependía tanto del origen divino que se les atribuía, sino de su *jurisdicción*, es decir, de que impartían justicia con probidad en un territorio dado. Lo menos que espera un ciudadano de la autoridad a que está sometido es que se le haga justicia, se solucionen los conflictos pacíficamente y se castigue a los culpables.

Los parlamentos no pueden seguir siendo fábricas de privilegios al servicio de los partidos o de los poderosos. No pueden cambiar las reglas cada vez que le conviene al gobierno de turno. Hay que mejorar sustancialmente la seguridad de las personas y protegerlas de la violencia de los delincuentes. Las fuerzas de orden público, que son la expresión más visible de la autoridad, tienen que ser percibidas con simpatías, no con temor. Hay que erradicar la corrupción o, al menos, convertir ese flagelo en un hecho excepcional. No es una casualidad que los tres países latinoamericanos donde existe menos corrupción (Chile, Costa Rica y Uruguay) la democracia es más estable. No es verdad que la corrupción no se puede frenar súbitamente. Se hizo en España tras el triunfo de José María Aznar. Si la cúpula dirigente da el ejemplo y castiga sin vacilaciones a los corruptos, el resto del aparato de gobierno comenzará a imitarla y pronto esa conducta se convertirá en un modo universal de comportamiento. No se trata de un problema cultural o étnico: uruguayos y argentinos tienen el mismo origen y los niveles de corrupción en Uruguay son mucho menores. Los chinos de Singapur son infinitamente más honrados que los de China comunista.

La burocracia tiene que transformarse en un verdadero servicio público, ágil y amistoso, sujeto a la autoridad de los usuarios, jerarquizado con arreglo a los méritos de quienes lo integran, y en donde no opere el favoritismo. La transparencia y la

rendición de cuentas deben ser los signos de identidad de los funcionarios públicos, desde el Presidente hasta el último burócrata. Todas las transacciones deben ajustarse a las reglas, publicarse en Internet y ser supervisadas por órganos competentes nacionales o internacionales. Hay dos servicios públicos esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sociedad: la salud y la educación. Ambos hay que percibirlos como lo que realmente son: inversiones en la calidad general de vida de la sociedad. Si las personas perciben que estos dos servicios alcanzan cierta calidad, la tendencia general será a respetar al Estado que los proporciona. La escuela pública, además, si comienza al nivel de parvulario, es un lugar ideal para combatir la desnutrición que afecta a los niños más pobres y les hace prácticamente imposible desarrollar la inteligencia y las habilidades potenciales que posean.

Y hay otros cinco elementos materiales que les transmiten a los ciudadanos la noción de que viven en un Estado que deben preservar porque les resulta conveniente: el suministro de agua potable y alcantarillado, electricidad, comunicaciones, transporte, y el acceso a una vivienda digna, síntomas todos que caracterizan a los sectores sociales medios.

En realidad, ninguno de estos factores son "derechos" que poseen los ciudadanos -pese a las frases demagógicas que se deslizan en las constituciones-, dado que se trata de bienes y servicios que hay que costear con los excedentes del trabajo producido por la sociedad, pero son cohesivos que fomentan la unidad nacional, aminoran los conflictos, y abonan el terreno para la creación de un clima social que propende a la paz y a la creación de riquezas. Es, en suma, el mundo feliz e ilusionado, dominado por la abrumadora presencia de las clases medias, únicos grupos que pueden garantizar la estabilidad y, por ende, la supervivencia de las democracias liberales.

Los caminos del desarrollo

Lo que intento decir es que necesitamos un Estado de calidad para que funcionen tanto la democracia como la economía de mercado, a lo que debe agregarse una observación bastante obvia: cuesta mucho dinero forjar un Estado de calidad, con buenos parlamentarios, buenos jueces, buena educación, funcionarios competentes, sanidad aceptable y una infraestructura razonablemente eficiente, capaz de segregar y sostener potentes clases medias. Pero, como sucede que los Estados sólo disponen de los excedentes que aporta el aparato productivo, la condición esencial para poder lograr ese objetivo es construir el mejor modelo de producción capitalista para poder llegar, poco a poco, al tipo de sociedad opulenta que vemos en el primer mundo. Vuelvo al título de estos papeles: una encrucijada y varios caminos. La encrucijada está ante nuestros ojos: vivimos en un universo que debemos cambiar radicalmente. El cambio que nos proponen los enfebrecidos radicales de siempre es, como no ignoramos, el llamado Socialismo del siglo XXI, que ya sabemos nos conduce al abismo. Pero ¿cuáles son los otros caminos que podemos explorar? Todos, por supuesto, son variantes de la estructura republicana clásica, dotada de economía de mercado y caracterizada por la existencia de propiedad privada, pero hemos comprobado que ese modelo no es suficiente. Al fin y al cabo, en Honduras y Haití, al menos teóricamente, funcionan tanto las estructuras republicanas como la propiedad privada y son dos países muy pobres. ¿Por qué? Hay que advertir que existen diversas variantes de eso a lo que llamamos capitalismo y algunas paralizan casi

totalmente el proceso de creación de riquezas. El capitalismo de estado, o estado-empresario, suele ser nefasto. Los gobiernos, amparados en el discurso nacionalista, se convierten en gerentes de empresas públicas que se tornan una fuente de corrupción, nepotismo, atraso tecnológico y pésima asignación de recursos, como han podido comprobar prácticamente todos los países que se embarcaron en esa aventura estatista, desde México hasta Argentina.

El capitalismo mercantilista no es mucho mejor. Provenía de los privilegios medievales, pero comenzó a desarrollarse enérgicamente en el siglo XVII, en época de las monarquías absolutistas, y desde entonces ha tenido defensores y beneficiarios, aunque fue contra éste que se alzaron los próceres de la Independencia latinoamericana, desde Bolívar hasta Hidalgo. En el capitalismo mercantilista el poder político elige a los empresarios a los que desea favorecer y establece con ellos una suerte de alianza non sancta. Los protege de la competencia, les otorga monopolios y les entrega mercados cautivos para que se enriquezcan rápida y permanentemente. A cambio, los empresarios mercantilistas sostienen a los políticos que los favorecen, creándose un círculo vicioso en el que los consumidores son invariablemente perjudicados.

El capitalismo oligárquico es parecido, pero son los empresarios los que poseen el control de la actividad política y colocan o suprimen candidatos. Generalmente, el poder económico recae en unas pocas familias que manejan el grueso de la economía, poseen amplios conglomerados de empresas, compran leyes especiales, dictan las reglas que mejor se acomodan a sus intereses y se asocian para suprimir la competencia, recurriendo a veces a la intimidación y la violencia. Son Estados secuestrados por los poderes económicos. Por último, llegamos al modelo capitalista realmente eficiente y generador de riquezas con vocación globalizadora. Es el capitalismo empresarial, abierto al mercado y a las inversiones extranjeras, reacio al proteccionismo, muy vinculado al comercio internacional, en donde no se le cierra el camino a ningún agente económico, nacional o foráneo, y en el que el Estado es un árbitro neutral sin favoritos, que facilita y estimula todas las transacciones comerciales legítimas, en procura de la diversificación creciente del parque empresarial y de un aumento constante de la productividad y de la complejidad técnica y científica, para que pueda ascender permanentemente el nivel de vida de la clase trabajadora y los niveles sociales medios.

Ese tipo de modelo económico, que no se crea en un año, pero sí en quince, en el curso de una generación, como se demostró en Singapur, en España o en Taiwan, es el que puede generar los recursos que se necesitan para costear un Estado de calidad que garantice un clima social estable y el mantenimiento de unas robustas clases medias. Hasta que no lo logremos, desgraciadamente, nuestros pueblos vivirán al borde del despeñadero, al alcance de cualquier aventurero que se proponga asaltar el cielo, aunque acabe desembocando en el infierno.